Bogotá abril 7 de 2008.

Honorables Magistrados

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

E.

S.

D.

Asunto: Acción Constitucional de Tutela.
Accionantes: Ciudadanos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Accionado: - ALVARO URIBE VÉLEZ, en su calidad de Presidente de la República.
- FERNANDO ARAUJO PERDOMO, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores.
- CARLOS HOLGUIN SARDI, en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia.
- FRANCISCO JAVIER RICAURTE en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Las y los abajo firmantes, identificadas e identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas, en nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos y como miembros del **MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO**, y ALIRIO URIBE MUÑOZ actuando como ciudadano, miembro del Colectivo de Abogados y como apoderado del señor FABIO AUGUSTO GOMEZ SIERRA quien otorga poder en su condición de padre de la victima RAUL GOMEZ RENDON, por medio del presente escrito y en ejercicio de la Acción Constitucional de Tutela consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política, presentamos acción de tutela en contra de **ALVARO URIBE VÉLEZ**, en su calidad de Presidente de la República, **FERNANDO ARAUJO PERDOMO**, en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, y **CARLOS HOLGUIN SARDI**, en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia y **FRANCISCO JAVIER RICAURTE** en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Acción que se presenta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable de conformidad con las consideraciones fácticas y jurídicas que entramos a reseñar:

I.- ANTECEDENTES

A.- EL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, es una coalición de organizaciones sociales y de víctimas, que nace en medio de la consolidación económica, política, y militar del paramilitarismo en las diferentes regiones del país, dinámica que tiene como uno de sus últimos signos, la implementación de la ley de Justicia y Paz y de sus decretos reglamentarios, por medio de los cuales se pretende la aplicación de una serie de beneficios jurídicos y económicos a favor de los principales jefes de las diferentes estructuras paramilitares, en directo perjuicio de los derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación integral.

Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generalizada que afronta nuestro país, y cuyos principales actores son los grupos paramilitares y agentes estatales, a través de violaciones masivas y sistemáticas de derechos fundamentales individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales, la destrucción de proyectos de vida, de entornos comunitarios, destrucción ambiental y apropiación de los territorios.

De este modo el movimiento reúne a víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, masacres, violaciones, expulsiones y traslados forzosos, detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos y de opinión, persecuciones políticas, exilio, destierros; víctimas de genocidio político y étnico; organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, quienes pretendemos afirmar nuestro derecho a la Memoria, a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación integral.

El 29 de junio de 2006, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado entregó dos detallados informes al Fiscal General de la Nación, Dr Mario Iguarán Arana, que contienen miles de casos de crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos por miembros de los grupos paramilitares y por agentes del Estado, a saber: “*Deuda con la Humanidad*”, en el que están contenidos 14.476 casos comprendidos en el período 1988 - 2003; y “*Colombia Nunca Más*”, que incluye 41.407 casos del período 1966 - 1998. Estos informes no solo documentaban ejecuciones extrajudiciales, “desapariciones” forzadas, homicidios políticos y torturas, con los nombres de las víctimas, circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como los presuntos autores; mencionándose en ellos los nombres de los bloques paramilitares implicados, y se identifican las unidades militares o de policía a las que están adscritos los agentes comprometidos en las acciones criminales, sino que a su vez reiteramos nuestras preocupaciones sobre la aplicación de la Ley 975/05, llamada de “justicia y paz”.

Hemos hecho un seguimiento y monitoreo juicioso al marco jurídico del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares, específicamente a la ley 782 de 2002, al decreto 128 de 2003, y en la actualidad a la ley de Justicia y Paz, así como a sus decretos reglamentarios y a las resoluciones expedidas por las diferentes entidades, por medio de las cuales se regulan ciertos aspectos fundamentales de este procedimiento especial, concluyendo que sus disposiciones no se traducen en la protección y garantía de los derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación, lo cual se refuerza con los resultados parciales que hasta el momento ha reportado la aplicación de esta ley, destacándose la falta de desmonte efectivo del paramilitarismo, toda vez que sus tropas permanecen intactas en las diferentes regiones en donde mantienen el control y dominio de las zonas, de igual forma se destaca el asesinato, desaparición y persecución de líderes sociales y de víctimas que han participado activamente en este procedimiento, la falta de entrega efectiva de bienes y de fosas comunes, la revelación de la identidad de los financiadores y agentes estatales que han promovido y patrocinado la ejecución de estos crímenes

Siendo conocedores de las falencias estructurales del marco jurídico de Justicia y Paz, y habiendo sido excluidos en palabras del Gobierno Nacional del procedimiento de justicia y paz el CABECILLA PARAMILITAR ALIAS MACACO abogamos por darle continuidad a los procesos ordinarios que se adelantan en su contra, consideramos que los jefes de los diferentes bloques de esas estructuras criminales, entre ellos Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” deben seguir siendo juzgados por la Justicia Ordinaria al haber violado las condiciones para recibir los beneficios de impunidad que otorga la Ley 975 y sus normas reglamentarias.

B.- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA: NUESTRA CONDICIÓN DE VÍCTIMAS DE CARLOS MARIO JIMÉNEZ, ALIAS “MACACO”.

Según la información oficial suministrada por la Fiscalía General de la Nación, Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, fungía como comandante del Bloque Central Bolívar, el cual era una de las 4 principales estructuras que conformaban el andamiaje del paramilitarismo en Colombia, en conjunto con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y los grupos independientes.

El Bloque Central Bolívar, a su vez agrupaba bajo su dirección y mando a diferentes bloques o frentes regionales que operaban en distintos departamentos del país, entre dichos grupos se destacan: El Bloque Cacique Pipintá, al mando de Albeiro Guerrero, el cual tuvo su centro de operaciones el departamento de Caldas, el Bloque Sur del Putumayo, el Bloque Libertadores del Sur el cual tuvo su centro de operaciones el departamento de Nariño al mando de Rodrigo Pérez Alzate, el Bloque Mártires de Gautica, el cual operaba en los departamentos de Chocó y Risaralda, el Bloque

Vencedores de Arauca la mando de Miguel Ángel Melchor, el Bloque Nordeste Antioqueño el cual operaba en el departamento de Antioquia, el Bloque Sur de los Andaquies el cual operaba en el departamento de Caquetá al mando de Nicolás Rodríguez, el Bloque Sur de Bolívar y el Frente Vichada.

Dada la magnitud de su dominio e influencia territorial, para la consolidación del mismo perpetraron múltiples crímenes de lesa humanidad, destacándose entre ellos, la comisión de masacres, de desapariciones forzadas, de torturas, de delitos sexuales, de homicidios, de amenazas y persecuciones, provocando el desplazamiento masivo de colombianos a los centros urbanos. De lo anterior se deriva, que el cálculo aproximado de los crímenes que se le atribuyen al Bloque Central Bolívar asciende a más de 3.000 víctimas.

El Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado agrupa un buen número de víctimas directas de las operaciones y atrocidades ejecutadas por esta estructura criminal, a continuación relacionamos algunas de ellas:

Víctima	Crimen	Sector Social	Hechos
RAUL DARIO GOMEZ RENDON	Homicidio	Sector Salud Asmedas.	Médico RAUL GOMEZ RENDON quién fuera asesinado cuando era Director del Hospital del Municipio del Bagre el 1 de junio de 2001, cuando miembros de grupos paramilitares lo abalearon en la heladería Ocasiones 2000 como retaliación por no prestarse a colaborar con las AUC, de una parte por no participar en un paro promovido por ese grupo ilegal que afectaba a los usuarios de la salud, por no incluir en la nomina del hospital a miembros de las AUC, y otro tipo de extorciones que este ciudadano no podía aceptar, son estos antecedentes lo que hicieron que se diera la orden ilegal de asesinarlo por parte de los comandantes de las AUC que operaban en esa zona entre ellos alias MACACO y alias J.J.
ESPERANZA AMARIS	Homicidio ¹	Defensora de los Derechos Humanos	Barrancabermeja (Santander), el 16 de octubre/ 03, hacia las 7: 30 pm, la señora AMARIZ se encontraba en la puerta de su casa vendiendo chance cuando 3 paramilitares a bordo de un vehículo de servicio público y armados, subieron violentamente al mismo a la señora AMARIZ. Sus hijos intentaron detenerlos pero fue imposible, MARCELA la hija mayor se sostuvo varios metros del taxi siendo arrastrada. Diez minutos después fue hallado el cuerpo sin vida.
INES PEÑA RODRIGUEZ, 22 años de edad	Amenazas y tortura.	Defensora de los DDHH, miembro organización Femenina Popular.	Hacia las 3 p.m. del 28 de enero de 2004, la señora Peña, estudiante de Ingeniería de Producción, quien tenía 3 meses de embarazo; salió de su casa rumbo a la biblioteca pública Alejandro Galvis, de B/meja. Fue abordada por 2 hombres que la encañonaron y obligaron a subirse a un vehículo donde durante 20 minutos la amenazaron,

¹ Proceso que se adelanta en la Unidad De Derechos Humanos de la Fiscalía en Bucaramanga bajo el radicado 1829.

			vertieron agua caliente en sus pies, alegando que era " <i>para que no anduviera en malos pasos</i> ". Mientras cortaban su cabello, uno de ellos decía " <i>eso es cultura por la vida</i> " – aludiendo a la sección que presentaba en un programa de t.v. -, y la conminó a abandonar la OFP y el espacio televisivo.
<p>Masacre del 28 de febrero. Asesinados: ISRAEL ARIZA OCHOA de 29 años, ORLANDO FORERO T. de 31 años, JOSE DARIO SANCHEZ AGUIRRE de 24 años, JESUS DANIEL GIL de 33 años, LEONARDO GOMEZ MARTÍNEZ de 29 años, WILLIAM ROJAS ZULETA, CESAR MANUEL BARROSO y HELIO MEJIA CASTELLANOS; al tiempo que fueron heridos WILSON SANCHEZ de 20 años y PEDRO PALACIOS de 60 años; y desaparecidos LUIS MIGUEL CIFUENTES y EDGAR ALFONSO SIERRA SIDRAY</p>	Masacre	Habitantes de los sectores populares de Barrancabermeja	El día domingo 28 de Febrero de 1.998, hacia las 5:30 p.m., un grupo paramilitar de 15 a 20 hombres incursionó en B/meja, al mando de alias "El Panadero", inició su recorrido en el barrio PROVIVIENDA, y después de recorrer varios sectores de la ciudad terminaron metros antes del balneario "La represa" en la vía que conduce al municipio de Puerto Wilches. En su macabro recorrido, asesinaron 8 personas, hirieron 2 y desaparecieron otras 2.
<p>Masacre De 16 De Mayo 1.998 JAIME YESID PEÑA R. de 16 años, CARLOS ENRIQUE ESCOBAR JIMENEZ de 17 años, JOSÉ MILTÓN CAÑAS CANO de 30 años, GARY DE JESÚS PIENDA RANGEL de 32 años, LUIS FERNANDO SUAREZ de 18 años, RICKY NELSON GARCÍA de 22 años, OSWALDO ENRIQUE VÁSQUEZ de 26 años, ENDER GONZÁLEZ BAHENA de 21 años, ROBERT GORDILLO SOLANO, de 23 años, WILFREDO PEREZ SERNA de 30 años, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ de 23 años, DIEGO FERNANDO OCHOA LOPEZ de 20 años, ALEJANDRA Ma. OCHOA LOPEZ de 20 años, LIBARDO LONDOÑO, de 75 años, JOSÉ REINEL CAMPOS, de 27 años, FERNANDO ARDILA LANDINES de 22 años, DANIEL</p>	Torturas, secuestros y Homicidios		El sábado 16 de mayo de 1998 aproximadamente a las 9:30 p.m., aproximadamente 50 paramilitares, incursionaron en el sector sur de B/meja, en barrios como, El camping, María Eugenia, Villa reliz, El campestre, entre otros, en 3 vehículos, una camioneta pick-up y 2 camiones modelo 350, cubiertos con una carpa abierta en la parte trasera. Luego de hacer un recorrido de vejaciones llegaron a una cancha de fútbol donde se encontraban unas 200 personas, a quienes ordenaron tirarse al suelo, tras golpearlas y pisotearlas, arrastraron consigo en camiones a numerosos pobladores, siguieron en su recorrido criminal por otros barrios barramejos, tras lo cual asesinaron a los retenidos

<p>CAMPO PÉREZ de 22 años, OSCAR LEONEL BARRERA, de 20 años, MELQUISEDEC SALAMANCA QUINTERO de 29 años, GIOVANNY HERRERA, de 20 años, CARLOS ARTURO PRADA de 35 años, WILSON PACHECO, de 20 años, JOSE OCTAVIO OSORIO, de 18 años, ORLANDO MARTÍNEZ de 27 años y JUAN DE JESÚS VALDIVIESO de 20 años. Así mismo fueron secuestradas y halladas muertas posteriormente: JOSÉ JAVIER JARAMILLO DÍAZ de 17 años, DIOMIDIO HERNÁNDEZ PEREZ, de 20 años, LUIS JESÚS ARGUELLO, de 23 años, NAYR GUZMÁN, GERMÁN LEÓN QUINTERO, de 24 años, ELIECER QUINTERO, de 22 años, PEDRO JULIO RONDÓN de 24 años;</p>			
<p>MIGUEL BASTO PRADA</p>	<p>Tentativa de Homicidio</p>	<p>Periodista</p>	<p>2001. Represalias realizadas por grupos paramilitares pertenecientes al Bloque Central Bolívar, por las denuncias de corrupción realizadas por el periodista en la Alcaldía de Yondo.</p>
<p>DIOFANOL SIERRA</p>	<p>Homicidio</p>	<p>Miembro de una organización social.</p>	<p>El 8 de abril de 2002, el señor SIERRA, fue sacado violentamente de su casa en el barrio la Esperanza de B/meja y asesinado.</p>

Lo anterior es suficientemente ilustrativo para acreditar el interés de nuestro movimiento en que se garanticen por medio de esta acción, los derechos a obtener verdad, justicia y reparación integral, en relación con la totalidad de casos perpetrados por este Bloque, los cuales le son atribuibles directamente a alias “Macaco”, en aplicación de la doctrina internacional de cadena de mando.

LOS GRAVES CRIMENES COMETIDOS POR CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ” SON CRIMENES INTERNACIONALES DE LESA HUMANIDAD, POR ENDE MAS GRAVES QUE EL NARCOTRAFICO Y DEBEN SER JUZGADOS EN COLOMBIA.

En los hechos que se imputan a **CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ”** hay una gama de delitos como son Ejecuciones Extrajudiciales múltiples, ejecuciones precedidas de Torturas, Desapariciones Forzadas, Desplazamientos Forzados, entre otras demasías que

reflejan los crímenes que han enlutado la historia de Colombia en los últimos años, delitos que no pueden ser indultados ni amnistiados, perdonados, olvidados, crímenes imprescriptibles a la luz del derecho internacional, crímenes que están tipificados en Colombia en normas como el Estatuto de Roma.

Los crímenes de Lesa Humanidad se caracterizan porque ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. Francois de Menthon, el Procurador General francés en el proceso de los criminales nazis en Nüremberg, los llamó certeramente "crímenes contra la condición humana [...] pues se trata de un crimen capital contra la conciencia que el hombre tiene hoy de su propia condición de ser humano"².

El Derecho Internacional Consuetudinario así como el Derecho Internacional Convencional, ha venido tipificando como Crímenes de Lesa Humanidad diversos atentados a los derechos fundamentales del ser humano. El genocidio³, la Esclavitud, el Apartheid⁴, la Desaparición Forzada⁵ y la Tortura⁶ constituyen algunos de los crímenes de Lesa Humanidad.

La Comisión de Derecho Internacional, en sus trabajos de redacción del proyecto de Código de Crímenes contra la paz y la Seguridad de la Humanidad, sustituyó en 1991 la noción de Crimen de Lesa Humanidad por el de violaciones sistemáticas o masivas de derechos humanos⁷. En su comentario la Comisión recordó esa sustitución de nociones, con lo cual las violaciones sistemáticas o masivas de derechos humanos pueden ser consideradas como una forma de crimen de lesa humanidad. El texto de la comisión catalogó como graves violaciones de derechos humanos: el asesinato; la tortura; el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; la persecución por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales de una manera sistemática o masiva y la deportación o traslado forzoso de poblaciones.

La noción de Crimen de Lesa Humanidad es hoy en día una noción integrante del *Jus Cogens*, y existe como infracción al Derecho Internacional, independientemente de que constituya o no una violación de derecho interno. Se trata de un crimen internacional de extrema gravedad "[cuyo] contenido, [...] naturaleza y [...] condiciones de responsabilidad están establecidas por el

²DOBKINE, Michel, *Crimens et humanité*.

³Resolución 96 (I) de Septiembre 11 de 1.946, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Convención para la Sanción del crimen de Genocidio. La resolución 96 (I) consideró como uno de los elementos del genocidio las persecuciones por razones políticas, pero la Convención no retomó este criterio.

⁴Convención Internacional sobre la Eliminación y Sanción del Crimen del Apartheid.

⁵Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra la Desaparición Forzada. Ambos instrumentos consideran la práctica sistemática de la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Las Resoluciones 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84) de la O.E.A. y 828 del Consejo de Europa, calificaron la desaparición forzada como un Crimen contra la Humanidad.

⁶La Declaración para la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia No. 163 del 18 de enero de 1.978.

⁷Comisión de Derecho Internacional. Informe de la Comisión de Derecho Internacional, suplemento No. 10 (A/45/10)

Derecho Internacional independientemente de lo decretado por el derecho interno de los Estados"⁸.

De la calificación de crimen de derecho internacional de los Crímenes de Lesa Humanidad, como lo señala Francois Rigaux, se destaca una importantísima consecuencia: la obligación internacional de reprimirlos⁹. Esta obligación general significa que los Estados deben investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves o sistemáticas violaciones de los derechos humanos fundamentales, sin duda que los delitos cometidos por el cabecilla paramilitar **CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias "MACACO", o "JAVIER MONTAÑEZ"** hacen parte de esta categoría.

Por lo tanto consideramos que por estar frente a crímenes sancionados tanto en el derecho interno como en el derecho internacional no deben ser procedente la extradición para que se juzgue un delito grave como el narcotráfico, pero no de la misma magnitud de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y que siguen operando con el nombre de AGUILAS NEGRAS u otras denominaciones. Debe continuarse con la investigación de estos delitos por la justicia ordinaria hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y hasta que haya justicia. Lo cual permitiría que las víctimas de estos graves crímenes tengamos acceso la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de los crímenes.

C.- LEGITIMACION DEL SEÑOR FABIO AUGUSTO GOMEZ SIERRA EN SU CONDICION DE VICTIMA.

El señor FABIO AUGUSTO GOMEZ SIERRA es ciudadano mayor de edad y vecino de Medellín, identificado con la C.C. No 512.680, padre del Médico RAUL GOMEZ RENDON quién fuera asesinado cuando era Director del Hospital del Municipio del Bagre el 1 de junio de 2001, cuando miembros de grupos paramilitares lo abalearon en la heladería Ocasiones 2000 como retaliación por no prestarse a colaborar con las AUC, de una parte por no participar en un paro promovido por ese grupo ilegal que afectaba a los usuarios de la salud, por no incluir en la nomina del hospital a miembros de las AUC, y otro tipo de extorsiones que este ciudadano no podía aceptar, son estos antecedentes lo que hicieron que se diera la orden ilegal de asesinarlo por parte de los comandantes de las AUC que operaban en esa zona entre ellos alias MACACO y alias J.J.

Para probar la legitimación adjuntamos los siguientes documentos:

- 1- Poder debidamente conferido y autenticado.

⁸Tribunal Permanente de los Pueblos,, Proceso a la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad en América Latina, ed. LIDLIP, Bogotá, 1.991, párr. 92, pág. 518.

⁹**RIGAUX, F.** en Proceso a la Impunidad. Op. cit.

- 2- El registro civil del occiso Dr. RAUL DARIO GOMEZ RENDON donde aparece que don FABIO GOMEZ lo registro en su condición de Padre el 28 de abril de 1967 en la Notaria 5ª de Medellín.
- 3- Registro No 44782 en copia simple de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, de la Fiscalía General de la Nación donde aparece el hecho del asesinato del Dr. RAUL DARIO GOMEZ RENDON y como presuntos responsables alias MACACO y alias J.J.
- 4- Fotocopia del Diario El Colombiano de martes 12 de diciembre de 2007 en la cual con el titular MACACO CONFESO 45 ASESINATOS indicando que CARLOS MARIO JIMENEZ alias MACACO en su versión ante JUSTICIA Y PAZ que el ordeno el asesinato del Dr. RAUL DARIO GOMEZ porque supuestamente enseñaba a los guerrilleros del ELN primeros auxilios.

D.- LA SITUACION ACTUAL DE ALIAS MACACO

Según informaciones de prensa¹⁰, el jefe paramilitar del “Bloque Central Bolívar”, CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ”, viene siendo investigado desde el año inmediatamente anterior por la continuidad de su accionar criminal, especialmente en la financiación y promoción del rearme de diferentes grupos paramilitares luego de su desmovilización, y de acogerse a los diferentes beneficios contemplados en la Ley de Justicia y Paz.

Desde el 22 de agosto de 2007¹¹, se viene manifestando por los medios de comunicación que el Presidente URIBE VÉLEZ habría ordenado la exclusión de alias MACACO de las listas de beneficiarios de Justicia y Paz¹², y solicitado a la Fiscalía General de la Nación, el traslado de su caso a la justicia penal ordinaria¹³, pero advirtiendo que tramitaría su extradición en caso de presentarse solicitud en tal sentido, previo el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el Ministro del Interior, CARLOS HOLGUÍN SARDI, anunció a los medios que en el caso del jefe paramilitar, el gobierno actuará “*acorde con su política de extradición*”, si la Corte Suprema de Justicia, así lo decide...

¹⁰ Fuente: Diario El Tiempo, 20 de octubre de 2006.

¹¹ Fuente: “Una grabación sería la prueba de que ‘MACACO’ seguía delinquiendo desde la cárcel de Itagüí”. eltiempo.com/justicia/2007-08-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3693806.html. Ninguna de las víctimas aquí firmantes ha sido informada oficialmente por el gobierno nacional de dicha situación a pesar de que el artículo 37 de la Ley 975, establece como uno de nuestros derechos el de “*recibir desde el primer contacto con las autoridades información pertinente para la protección de sus intereses*”.

¹² Habría dicho el presidente URIBE VELEZ que alias MACACO fue... “*retirado del proceso de paz; el Gobierno estima que ha incumplido con los requisitos del proceso*”.

¹³ “Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, ad portas de su extradición a Estados Unidos”. Fuente: Revista SEMANA: semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=105790. Las víctimas tampoco hemos sido informadas de tal decisión.

*“Holguín habló sobre el tema con los jefes paramilitares que continúan reclusos en Itagüí. “Si la Corte da concepto favorable a la extradición de alias “MACACO” por narcotráfico y se llenan los requisitos, la política del gobierno es supremamente clara y se ha venido cumpliendo, sin excepciones”, repitió el ministro HOLGUÍN SARDI”.*¹⁴

La respuesta no se hizo esperar, e igualmente a través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento que el 27 de agosto siguiente, los EE.UU., iniciaron el proceso para solicitarlo en extradición¹⁵.

Señala la información suministrada que en la decisión de retiro del proceso, se tuvo en cuenta que el miércoles 25 de agosto, el director de la Policía Nacional, general ÓSCAR NARANJO, informó a la Casa de Nariño que interceptaciones a comunicaciones al paramilitar y “evidencias reunidas tras capturar a personas cercanas a él”¹⁶, permitían confirmar que seguía delinquiendo después de su desmovilización.

No solo llama la atención que aunque era de público conocimiento que el paramilitar CARLOS MARIO JIMÉNEZ, era señalado anteladamente como responsable de la “creación de nuevos” grupos paramilitares en Norte de Santander: “Águilas Negras”, solo se haya procedido a su retiro de la competencia de la denominada “Ley de Justicia y Paz”, en atención a sus nexos con el narcotráfico.

El 2 de Abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a la solicitud de extradición de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, tras ello, el Presidente de la República expuso un comunicado de prensa por medio del cual informa a la opinión pública la decisión del gobierno nacional de dar cumplimiento inmediato a la orden de extradición.

Si bien, la extradición es un mecanismo jurídico habilitado con el propósito de que un Estado diverso, investigue y juzgue la comisión en este caso del punible de narcotráfico y aplique las sanciones correspondientes de acuerdo a su normatividad interna, entendemos que en el caso que nos ocupa, tal decisión

¹⁴ “La extradición de “Macaco” se produciría antes de terminar el año”. Fuente: Caracol. 28 de agosto de 2007.

¹⁵ El 6 de septiembre de 2007, publicó el diario EL PAIS: “Tres días después de que el Gobierno de Colombia anunciara que el ex comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, había perdido los beneficios de Justicia y Paz, una corte distrital de Estados Unidos pidió formalmente su extradición. El fiscal Mario Iguarán Arana explicó que la solicitud fue presentada por la Corte Distrital de Washington, donde ‘Macaco’ es requerido para que responda por el delito de conspiración para traficar droga. (...) la Fiscalía General de la Nación firmó ayer mismo la orden de captura contra alias Macaco para hacer efectiva la solicitud. Según Iguarán, la Embajada de EE.UU cuenta con 60 días, a partir de ayer, para presentar la resolución de acusación y las pruebas”.

Caracol radio, informó: “El gobierno de EE.UU. consideró que el proceso de extradición de alias “Macaco” se debe dar antes de tres meses. El encargado de negocios de la embajada de los EE.UU. en Bogotá, Brian Nichols, explicó que su gobierno trabaja conjuntamente con Colombia para lograr acabar el proceso de extradición de alias “Macaco” en un término no mayor a 90 días. Brian explicó que todo el trabajo va muy bien, que desde que Colombia le notificó que está interesado en seguir el proceso de extradición, de inmediato mandaron el pedido, el mismo día. “Estamos trabajando en juntar todas la pruebas, las evidencias y vamos a atender el trámite en el tiempo indicado de 90 días”, expresó el encargado Brian Nicholls”.

¹⁶ Se dice que una captura clave en el caso fue la del extraditable CARLOS ARTURO PATIÑO, alias “PATEMURO”, quien según la DIJÍN, era su enlace con el cartel del Norte del Valle

compromete de manera evidente la vigencia y efectividad de nuestros derechos fundamentales a obtener verdad, justicia y reparación integral, cuya garantía al interior de un Estado social de derecho construido sobre bases democráticas debe primar sobre la justiciabilidad del tráfico de estupefacientes, al responder a principios y valores superiores recogidos en nuestra carta política y en diversos instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.

II.- ACCION DE TUTELA QUE SE PRESENTA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIALE

Ha establecido la Corte Constitucional¹⁷, en punto de los caracteres subsidiario e inmediato de la acción de tutela, que el primero apunta a que sólo es procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); y en relación con la inmediatez la acción de tutela es un remedio de aplicación urgente.

No existe medio de defensa judicial efectivo para la protección de nuestros derechos fundamentales, toda vez que las víctimas no tienen participación en el proceso de extradición según lo conceptuado en el capítulo II, Título I, Libro V de la Ley 600 de 2000, pues básicamente éste es un trámite entre el estado colombiano, el estado requirente y el procesado, donde legalmente no se encuentra prevista la participación de las víctimas.

Podría considerarse que la Ley 975 de 2007 entrega exiguos elementos de participación, verbigracia los contenidos en el artículo 137 de dicha ley, pero los mismos se restringen a dicha actuación y no pueden tener efectos hacia el trámite de extradición que es un procedimiento administrativo, diferente y prácticamente aislado.

Como se confirma, no existe mecanismo de protección diferente y eficaz, al tiempo que continúa el procedimiento de extradición, pues la Corte Suprema de Justicia dio su concepto favorable al mismo y se ha anunciado, que el Gobierno Nacional ya ordenó la extradición.

En estos términos, aunada a la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz, presentamos esta acción constitucional, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo establecido en el

¹⁷ Corte Constitucional. Sentencia N° T-1. Abril 3 de 1992, Sentencia C – 543 de 1992, T-520. 16 de Septiembre de 1992, entre otras.

artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

III.- MEDIDA PROVISIONAL SOLICITADA

De conformidad con las facultades que nos otorga el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicitamos a los Honorables Magistrados, se sirvan suspender de manera inmediata la orden de extradición de CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ”, hasta tanto no se resuelva de fondo la acción constitucional deprecada, toda vez que durante su estudio, pueden transcurrir varios de los momentos que se especifican en los artículos 514 y s.s. de la Ley 600 de 2000, y convertirse el amparo en mera aspiración.

IV.- CONSIDERACIONES Y DERECHOS RESPECTO DE LOS CUALES SE SOLICITA EL AMPARO.

A.- FUNDAMENTABILIDAD AUTÓNOMA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

En la normativa nacional existen varias disposiciones que se refieren a los derechos de las víctimas de las conductas tipificadas por el estatuto penal sustancial, no obstante, en la C.P. no hay una definición explícita de los mismos, por lo cual hay que acudir a diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y de órganos internacionales de protección de derechos humanos para poder definirlos.

Elementos de los derechos

En cuanto al derecho a la justicia, en virtud de los diferentes pronunciamientos de organismos internacionales de protección en materia de derechos humanos, se puede decir que éste contiene al menos cinco requisitos para ser cumplido:

“(i) el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos; (ii) el deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; (iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iv) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso; y, (v) el deber de imponer penas adecuadas a los responsables”¹⁸.

En lo que respecta al primer deber, es claro que está prohibido que los Estados obvien el deber de sancionar debidamente a quienes han cometido

¹⁸ Botero, Catalina y Esteban Restrepo, “Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia”, texto multicopiado

violaciones a los derechos humanos. En caso que un Estado incorpore dentro de su legislación una medida administrativa o judicial que signifique que responsables por dichas agresiones van a dejar de ser sancionados por tales delitos, la misma se vuelve contraria a diferentes instrumentos internacionales de protección y por lo tanto debe, simplemente, carecer de cualquier efectividad jurídica. Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia dictada en el caso Barrios Altos:

“[R]esultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (...) 43. Las leyes de auto-amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. (...) 44. (...) [L]as mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. (...)”¹⁹.

El segundo elemento del derecho a la justicia tiene que ver con el deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con violaciones de los derechos humanos. Al respecto, se ha señalado que esta obligación no sólo es incumplida cuando el Estado deja de investigar una violación, sino, también, cuando habiendo un proceso judicial abierto, el mismo no se reviste de toda la formalidad pertinente, no se dota de medios adecuados para buscar y valorar las pruebas, no se desarrolla con plena independencia e imparcialidad del investigador, y no tiene tiempos prudenciales que permitan en cada caso concreto recolectar, sistematizar y analizar todos los datos procesales para proponer conclusiones judiciales serias.

Ese deber de investigar significa que el caso analizado no sólo puede pretender hallar a una parte de los autores, o sancionar parcialmente a éstos, sino que debe estar atravesado por la búsqueda de la verdad histórica dentro de dicho caso, la cual incorpora (i) la sanción a los autores materiales, intelectuales, colaboradores y financiadores, (ii) el establecimiento del tiempo, modo y lugar del hecho cometido, y (iii) la motivación del mismo.

El tercer elemento del derecho a la justicia se caracteriza por el acceso a un recurso judicial efectivo. En este punto, se entiende su cumplimiento cuando el Estado, además de cumplir con los deberes de investigación y sanción de los responsables por violaciones a los derechos humanos, permite, mediante la adopción de mecanismos judiciales y administrativos, que las víctimas directas

¹⁹ Corte IDH, “Caso Barrios Altos”, 2001, párrf. 41, 43 y 44

de dichos hechos y, en ciertos casos, la sociedad en general, pueda exigir sus derechos de manera independiente al deber general del Estado de garantizarlos. Se ha dicho que, por lo menos, el Estado deberá:

“(1) Dar a conocer, a través de medios oficiales y privados, todos los recursos disponibles contra las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; (2) adoptar, en cualquier tipo de proceso que afecte a las víctimas, las medidas necesarias para que éstas no sean incomodadas, se proteja su intimidad y se garantice su seguridad, la de su familia y la de los testigos; y (3) utilizar todos los medios diplomáticos y jurídicos apropiados para que las víctimas puedan iniciar las acciones pertinentes y puedan presentar las demandas de reparación que sean del caso. Este derecho implica, así mismo, los deberes del Estado de adoptar medidas que permitan la presentación de demandas tendentes al logro de reparaciones colectivas y de acceder a los procedimientos internacionales sin perjuicio de los recursos nacionales”²⁰.

Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación²¹.

El cuarto elemento es el deber estatal de respetar en todos los procesos judiciales las reglas del debido proceso. En este aspecto la principal característica es que, si bien en todos los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos los investigados tienen derecho a que se les respete la totalidad de las garantías procesales, en caso que éstos hayan sido usados como herramienta para perpetuar la impunidad por los actos delictivos –ya sea por falta de sanción o sanciones irrisorias- no puede predicarse del fallo judicial cosa juzgada.

Lo anterior es tenido en cuenta por el Estatuto de Roma -tratado debidamente ratificado por Colombia-, del cual se ha señalado por la Corte Constitucional que:

“la cosa juzgada no operará cuando el proceso que se hubiere seguido en otro tribunal a) obedeciere al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte; o b) no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial, o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia (artículo 2, párrafo 3)” (F 2). Se quiere así que los crímenes más graves no queden en la impunidad”²².

²⁰ Botero, Catalina y Esteban Restrepo, op. cit.

²¹ Cfr. *Caso de la Comunidad Moivana*, supra nota 4, párr. 147; *Caso Hermanas Serrano Cruz*. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 63, y *Caso 19 Comerciantes* supra nota 193, párr. 186.

²² Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-578 de 2002

En general, se puede afirmar que *“Los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”*²³.

Por último, el quinto elemento del derecho a la justicia tiene que ver con el deber del Estado de imponer penas adecuadas a los responsables. En esta característica la idea principal es que el tribunal que conozca de la violación a los derechos humanos debe realizar un juicio de proporcionalidad entre el hecho cometido y la sanción impuesta teniendo en cuenta dos factores: el tiempo de la pena de manera abstracta y las condiciones de cumplimiento de la condena.

Lo anterior significa que no sólo es cumplido el deber de imponer penas adecuadas cuando el Estado sanciona, por ejemplo, con una alta cantidad de tiempo privativo de la libertad a los responsables, sino, además, cuando se garantiza que esa pena será realmente acatada.

El segundo derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos es el relativo a la verdad. Según los Principios de Joinet las víctimas tienen, por un lado, derecho inalienable a la verdad, y, por el otro, el deber de recordar.

La primera característica de este derecho implica que la víctima, desde un plano individual, debe *“saber quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos, el destino de las personas, en los casos de desapariciones forzadas o asesinatos, y el estado de las investigaciones oficiales está firmemente garantizado en el derecho, la jurisprudencia y la doctrina internacionales”*²⁴.

Desde el plano colectivo el derecho a la verdad implica *“que la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo ocurrido así como las razones y circunstancias en las que los delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”*²⁵. Esto último está relacionado con la segunda característica del derecho, la cual es el *“deber de recordar”*.

Citando lo dicho en los Principios de Joinet:

*“Principio 1. El derecho inalienable a la verdad
Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la*

²³ CIDH, “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia”, párrf. 35

²⁴ Botero, Catalina y Esteban Restrepo, p. 17

²⁵ *Ibidem*

violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos.

Principio 2. El deber de recordar

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Principio 3. El derecho de las víctimas a saber

Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.

Principio 4. Garantías para hacer efectivo el derecho a saber

Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho a saber. Cuando las instituciones judiciales no funcionan correctamente, se debe dar prioridad, en una primera fase, a las medidas encaminadas, por una parte, a la creación de comisiones extrajudiciales de investigación y, por otra, a la conservación y consulta de los archivos correspondientes.”

El tercer derecho que se les ha reconocido a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ha sido el referido a la reparación integral. Sobre esta garantía los Principios de Joinet han señalado:

“el derecho a la reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de satisfacción de alcance general, como las previstas en el Conjunto de principios y directrices fundamentales sobre el derecho a obtener reparación”. (Principio 36)

Para satisfacer lo anterior, desde el plano de lo individual, el derecho a la reparación implica los siguientes elementos: (i) restitución; (ii) indemnización; (iii) rehabilitación; (iv) satisfacción; y (v) garantías de no repetición. En su plano colectivo implica la *“adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”*²⁶.

Protección constitucional de los derechos de las víctimas

²⁶ Fundación Social, *“Ley de alternatividad penal y justicia transicional. Documento de Recomendaciones”*, Bogotá, Colombia, 2004, p. 21

Ahora, si bien es cierto que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral han sido protegidos por nuestra administración de justicia, en general, y la Corte Constitucional, en particular, teniendo como principal fundamento la incorporación de tratados y convenios internacionales a nuestro ordenamiento interno desde el concepto de bloque de constitucionalidad, los mismos también han sido tutelados entendiéndolos como extensiones de nuestros derechos fundamentales.

Según la Corte Constitucional *“los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica reconocidos a las víctimas o perjudicados por un hecho punible, pueden tener como fundamento constitucional otros derechos, en especial el derecho al buen nombre y a la honra de las personas (arts 1º, 15 y 21, C.P.)”*²⁷.

Los derechos a la verdad y la reparación integral implica que la víctima tiene derecho a que se trate con dignidad –artículo 1 C.P.-, obtenga del Estado y los particulares reparación por los daños causados –artículo 6 C.P.-, reciba el mismo trato dentro de los procesos judiciales que se adelanten para establecer la responsabilidad de sus victimario –artículo 13 C.P.-, se proteja por parte del Estado su buen nombre –artículo 15 C.P.-, y se garantice su honra –artículo 21 C.P.-

El derecho a la justicia implica acceder a la administración de justicia y que la misma garantice el debido proceso en miras de satisfacer sus pretensiones – artículo 29 y 229 C.P.-, y apelar las sentencias que considere contraria a sus pretensiones –artículo 31 C.P.-.

Respecto de la participación de las víctimas en los procesos judiciales que se adelanten por el delito o los delitos que los afectaron, la Corte ha señalado que ésta se encuentra estrechamente relacionada con el respecto a la dignidad humana -el cual hace parte del artículo 1 superior-²⁸. Dicha participación también se fundamenta en el artículo 2 de la C.P., relativo al derecho a la participación por parte de los ciudadanos –en este caso las víctimas- de las decisiones que los afectan.

En conclusión, la consideración según la cual los derechos de las víctimas son derechos fundamentales ha sido sintetizada por la Corte Constitucional en su sentencia C-228 de 2002, donde señaló que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos tienen garantías especiales desde la C.P. que se pueden describir de la siguiente manera:

“...tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con

²⁷ Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad C-228 de 2002

²⁸ Ibídem, párr. 4.1

dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.

2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.

Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesa a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. ello puede ocurrir, por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo —porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público— pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal”²⁹. (Subrayas fuera del texto original)

Según el alto tribunal:

“...a esos derechos de las víctimas (verdad, justicia y reparación) corresponden ciertas obligaciones del Estado, pues si las víctimas tienen derecho no sólo a ser reparadas sino además a saber qué ocurrió y a que se haga justicia, entonces el Estado tiene el deber correlativo de investigar seriamente los hechos punibles. Esta obligación estatal es tanto más intensa cuanto más daño social haya ocasionado el hecho punible. Y por ello ese deber estatal adquiere particular fuerza en los casos de violaciones de derechos humanos. Por ello, la Corte Interamericana ha señalado, con criterios que esta Corte Constitucional prohija, que las personas afectadas por conductas lesivas de los

²⁹ Con este pronunciamiento la Corte Constitucional consolidó una línea jurisprudencial ya planteada en las Sentencias de constitucionalidad C-740 y C-1149, y de unificación SU-1184, todas de 2001

*derechos humanos tienen derecho a que el Estado investigue esos hechos, sancione a los responsables y restablezca, en lo posible, a las víctimas en sus derechos*³⁰.

Protección internacional de los derechos de las víctimas

Por su parte, en virtud del bloque de constitucionalidad, los derechos de las víctimas son considerados derechos de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano. Al respecto, *“tanto la Declaración Americana de Derechos del Hombre, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, marcan el inicio de una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia”*³¹.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho respecto del derecho a la verdad que:

*“se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables conforme a los parámetros de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre el deber de los Estados de establecer judicialmente las circunstancias en las cuales se consuman violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de los implicados, como parte de la reparación debida a los familiares de la víctima”*³².

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha reconocido que el derecho a la verdad debe entenderse parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante su interpretación extensiva. En un caso de desaparición forzada, este órgano señaló que los Estados deben garantizar que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos conozcan la verdad respecto de los hechos cometidos³³. La CIDH señaló algo similar el extender el contenido del derecho a la verdad, pues en recientes decisiones adujo que este derecho implica *“conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quienes participaron en ellos”*³⁴.

Por su parte, el derecho a la justicia se desprende de los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como bien lo ha señalado la CIDH:

³⁰ Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-004 de 2003

³¹ *Ibidem*

³² CIDH, “Informe de la CIDH sobre el proceso de desmovilización en Colombia”, párr. 31

³³ Andreu-Guzman, Federico, “Fuero Militar y derecho internacional”, Comisión Colombiana de Juristas y Comisión Internacional de Juristas, Bogotá, D.C, Colombia, abril de 2003, p. 44

³⁴ CIDH, Informe No. 37/00, de 13 de abril de 2000, caso 11-481, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gáldamez, párr. 148

“En el sistema interamericano, esta obligación de los Estados se encuentra reflejada en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana y en los artículos 1(1), 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Conforme a estas normas y su interpretación autorizada, los Estados miembros de la OEA tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público de manera que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y de prevenir, investigar, juzgar y sancionar su vulneración”³⁵.

En síntesis, haciendo una mirada general a los instrumentos de protección, el derecho a la justicia se encuentra contenido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o Degradantes, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, los artículos 9 y 13 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo X de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros instrumentos y documentos de protección³⁶.

El derecho a la reparación también se fundamenta en instrumentos internacionales de protección. La Corte IDH dijo respecto de esta garantía que:

“las medidas de reparación deben tender a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas... Dichas medidas comprenden las diferentes formas en que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que incurrió, que conforme al derecho internacional consisten en medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición”³⁷.

Se podrían citar, entre otros instrumentos de protección encargados de señalar el derecho a la reparación como un derecho humano, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2.3, 9.5, y 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 11.3 y 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Cruels, Inhumanos o Degradantes, y los artículos 25, 63.1 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte IDH dijo respecto del derecho a la reparación que es:

³⁵ Ibídem, párr. 35

³⁶ Para un desarrollo de los instrumentos internacionales en materia de derecho a la justicia, ver, Andreu-Guzman, Federico, ibídem, p. 26-27

³⁷ Corte IDH, Caso Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 237. Caso Cantos, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 108. Caso del Carachazo, Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de agosto de 2002, párr. 78.

“una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación”³⁸.

Los preceptos internacionales antes mencionados tienen una relevancia especial a la hora de garantizar los derechos fundamentales de la población colombiana, pues la Corte Constitucional ha establecido que no sólo hacen parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, sino que, además, las interpretaciones de los mismos realizadas por los respectivos órganos internacionales de supervisión -tales como la CIDH y la Corte IDH- son especialmente importantes al momento de defender la supremacía constitucional³⁹.

Sobre esta incorporación al bloque de constitucionalidad de los pronunciamientos internacionales de organismos autorizados, se ha señalado que *“si los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados, deben ser interpretados de conformidad con la interpretación que de los tratados hacen los órganos autorizados a nivel internacional, que en el Sistema Interamericano serían la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana”⁴⁰.*

B.- CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Teniendo en cuenta que los derechos de las víctimas son exigibles mediante acción de tutela, por medio de la presente pretendemos que el paramilitar CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO” o “JAVIER MONTAÑEZ”, no sea extraditado hasta tanto no sea juzgado, condenado y cumpla la sanción correspondiente en nuestro país, dentro de la justicia ordinaria, por los graves crímenes cometidos como jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar y de las Águilas Negras, denominación ésta última bajo la cual siguió cometiendo conductas delictivas a pesar de su supuesta desmovilización.

La incomunicación formal a las víctimas de las gestiones que ha venido realizado el gobierno nacional y de las que sólo tenemos referencia por los medios de comunicación resulta vulneratoria de nuestro derecho a la justicia en su elemento de acceso a un mecanismo judicial efectivo, así como del propio artículo 37 de la Ley 975, que establece dentro de los derechos de las

³⁸ Sentencia de 29 de agosto de 2002, Caso del Caracazo c. Venezuela, párr. 76, en, Andreu-Guzman, Federico, *Ibíd*em, p. 42

³⁹ Ver, Corte Constitucional, sentencias de constitucionalidad C-010 de 2000 y C-228 de 2002, y de tutela T-1319 de 2001.

⁴⁰ UPRIMNY, Rodrigo, “El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”, en Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Compilación de jurisprudencia nacional e internacional*. Vol. 1. Bogotá D.C., 2000

víctimas recibir durante todo el procedimiento un trato humano digno, una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito⁴¹; a ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas; a recibir desde el primer contacto con las autoridades información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas⁴²; a ser informadas sobre las decisiones relativas a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar, entre otros.

Lo anterior es de suma gravedad si se tiene en cuenta que el Estado tiene el deber de sancionar a alias “MACACO” por las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido en Colombia. Así mismo, tiene el deber de investigar todos los asuntos relacionados sus crímenes o que se desprendan de su participación como miembro del paramilitarismo, deber que se convertiría en mera expectativa si es objeto de extradición. Por lo tanto consideramos que seguir adelante con la extradición de este cabecilla paramilitar se traduce en una sustracción de la justicia ordinaria colombiana, pues los crímenes cometidos en Colombia son crímenes de lesa humanidad que son más graves que el delito del narcotráfico.

Lo anterior, toda vez que no existiría posibilidad real de recaudos probatorios tales como declaraciones, injuradas, etc., lo cual, al parecer, ha sido afirmado por el mismo CARLOS MARIO JIMÉNEZ tiene en su poder. El director de la DIJIN, “*Coronel Cesar Augusto Pinzón, señaló que al momento de notificar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, sobre el inicio de su proceso de extradición, el jefe paramilitar vociferó y advirtió sobre prender un nuevo ventilador por la información que dice tener en contra de muchas personas. (...) "El dice que tiene mucho que contar, pero eso es una estrategia para intentar evadir la extradición", afirmó el Coronel César Augusto Pinzón.(...)*

De ser cierta la última manifestación del director de la DIJIN, las autoridades tienen la obligación de poner a disposición de la justicia ordinaria estas informaciones a fin de que proceda el juzgamiento y sanción correspondientes, así como a la ejecución de la sentencia de rigor. Ello por lo menos permitiría dar un primer paso en el cumplimiento de la exigencia hecha a Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴³, en el sentido de que las investigaciones deben ser **serias** para identificar los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación.

Adicionalmente, la extradición del jefe paramilitar implicaría que como víctimas en Colombia no tendríamos derecho a la justicia, a la reparación del daño sufrido y demás acciones judiciales, administrativas o de otra índole que

⁴¹ La cual según la sentencia C-575 de 2006, confutada por decretos del gobierno y resoluciones de la Fiscalía, en el entendido de una responsabilidad solidaria.

⁴² En los términos de las sentencia C-370 de 2006 y C-228 de 2002

⁴³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 5 de Septiembre de 2005.

ofrezca el derecho interno o internacional en vigor, toda vez que su garantía quedaría supeditada al retorno efectivo del paramilitar a Colombia, lo cual es de difícil realización.

No podemos olvidar que el marco jurídico de la denominada “*Ley de Justicia y Paz*”, establece que el paramilitar que se acoja al mismo y siga delinquirando, perderá sus beneficios y deberá ser procesado por la justicia ordinaria, a fin de que allí se cumpla con el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, se verifique un debido proceso, y se aplique y ejecute la sanción a que haya lugar.

A contrario sensu, lo que hemos observado es una suerte de convocatoria y notificación del Presidente URIBE VELEZ, a la extradición, tal si fuese el resultado jurídico natural bajo la aplicación del principio de legalidad. Llamado al que presurosamente ha acudido el gobierno norteamericano, cuyos representantes igualmente manifestaron que están laborando de manera coordinada y rápida con el gobierno nacional, a fin de efectuar la extradición aludida, y finalmente el día 2 de abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia da su concepto favorable al trámite y el Presidente URIBE VELEZ anuncia que procederá a la extradición.

Como se adviera, dichas acciones político- administrativas, siguen desconociendo nuestra calidad de víctimas de crímenes de lesa humanidad, y nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía a la no repetición, con mayor razón cuando el paramilitar en cuestión, no será procesado por dichos punibles sino por el delito de narcotráfico en las denominaciones y modalidades que prevé la ley norteamericana para tal efecto.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento nos permitimos certificar que no hemos presentado acción constitucional de tutela por las mismas consideraciones fácticas y jurídicas aquí expresadas.

NOTIFICACIONES

Recibimos notificaciones en la Calle 16 No. 6-66. Oficina 2506. Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá.

ANEXOS

Anexamos a esta acción de tutela los siguientes documentos:

- 1- Certificados de Existencia y Representación Legal de las organizaciones de derechos humanos firmantes que son miembros del MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO.
- 2- Poder debidamente conferido y autenticado.
- 3- El registro civil del occiso Dr. RAUL DARIO GOMEZ RENDON donde aparece que don FABIO GOMEZ lo registro en su condición de Padre el 28 de abril de 1967 en la Notaria 5ª de Medellín.
- 4- Registro No 44782 en copia simple de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, de la Fiscalía General de la Nación donde aparece el hecho del asesinato del Dr. RAUL DARIO GOMEZ RENDON y como presuntos responsables alias MACACO y alias J.J.
- 5- Fotocopia del Diario El Colombiano de martes 12 de diciembre de 2007 en la cual con el titular MACACO CONFESO 45 ASESINATOS indicando que CARLOS MARIO JIMENEZ alias MACACO en su versión ante JUSTICIA Y PAZ que el ordeno el asesinato del Dr. RAUL DARIO GOMEZ porque supuestamente enseñaba a los guerrilleros del ELN primeros auxilios.

PETICIONES

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es de rigor solicitar:

- 1- Que se declare que hasta tanto CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ no sea juzgado y pague la eventual pena a las que fuere condenado en Colombia, su extradición viola los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, que se traduce en una sustracción de la justicia de un cabecilla paramilitar que ha cometidos crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
- 2- Se suspenda la ejecución de la orden de extradición de CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ”, hasta tanto haya sido investigado y juzgado por la justicia ordinaria por los graves crímenes cometidos en Colombia, y que una vez haya cumplido las condenas a que haya lugar se proceda con el trámite correspondiente.
- 3- Que se ordene que CARLOS MARIO JIMÉNEZ, alias “MACACO”, o “JAVIER MONTAÑEZ” no se le aplique la normatividad de la Ley 975 y sus decretos reglamentarios de la jurisdicción de Justicia y Paz, por cuanto según las autoridades ha continuado delinquiendo y por tanto debe ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria.
- 4- Se ordene a las diferentes autoridades competentes al interior de la justicia penal ordinaria, que reanuden las investigaciones, hagan

efectivas las órdenes de captura, las medidas de aseguramiento, los llamamientos y las sentencias condenatorias dictadas en el curso de los procesos que se adelantan en contra de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”.

Atentamente,

EDUARDO CARREÑO WILCHES.
C.C. No